



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

Bogotá, D.C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

DEMANDANTE: YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA

**DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO**

VINCULADA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Surtido el trámite procesal correspondiente y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir de fondo la controversia planteada dentro del presente proceso.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

1.1. PRETENSIONES

YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, pretende que se declare la existencia del silencio administrativo negativo respecto de la petición radicada el 6 de junio de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y la correspondiente nulidad del acto ficto generado frente a la citada petición¹.

A título de restablecimiento del derecho, pretende que se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, igualmente, solicita el cumplimiento de los artículos 187, 188 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. FUNDAMENTOS DE HECHO

La docente demandante el 12 de marzo de 2015, le solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

¹ Folios 1 a 9.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

el reconocimiento y pago de las cesantías, a lo cual la entidad demandada profirió la Resolución No. 4482 del 27 de agosto de 2015, accediendo a lo solicitado, cesantías parciales que le fueron consignadas el 1º de diciembre de 2015.

Indica que el plazo que tenía la entidad para cancelar las cesantías era hasta el 30 de junio de 2015, pero se realizó el 1º de diciembre de 2015.

Con fecha 6 de junio de 2018, la demandante petitionó el pago de lo adeudado por concepto sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías solicitadas, petición ante la cual la entidad guardó silencio.

1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Afirma que por disposición legal el pago de las cesantías no debe exceder los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud, cancelar por fuera de este término genera una sanción para la entidad, equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

Hace referencia al espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006, al establecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía de la demandante, la cual está siendo burlada por la entidad demandada, pues se encuentra cancelando la prestación con posterioridad a los 70 días después de haber realizado la petición de estas.

Explica que la contabilización de los 70 días surge de los 60 días que contempla la Ley 1071 de 2006 más 10 días según la Ley 1437 de 2011.

2. CONTESTACIÓN

La **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** dio contestación oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. No propuso excepciones previas.

Por su parte, la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** guardó silencio en esta etapa procesal.



ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.1. PARTE DEMANDANTE

El apoderado presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda. Haciendo referencia a la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con el tema objeto de debate. Señaló que la entidad accionada no respetó el termino de ley sobre los 70 días para proceder al pago de las cesantías.

2.2. PARTE DEMANDADA y VINCULADA – NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Por intermedio de apoderado judicial, la entidad presentó los alegatos de conclusión haciendo alusión a la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria en el sentido de que al tratarse de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste al valor presente; de igual forma, trae a colación diversos apartes normativos y jurisprudenciales referentes a la condena en costas del proceso en el sentido de resaltar el actuar de buena fe presentado por la Entidad, afirmando que la falta del cumplimiento de dicho requisito procesal no procede dicha condena.

2.3. MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público guardo silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Despacho Judicial es competente para conocer el proceso y dictar sentencia en primera instancia dentro de la controversia en referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 numeral 4, 138, 155 numeral 2, y 156 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011; por tratarse de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, cuya cuantía no excede de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de interponer la demanda², y por el último lugar de prestación de servicios³.

2. TEORÍA DE LAS PARTES

Afirma la señora **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, que acorde con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague la sanción por mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles, después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la parte accionada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

La **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** se opusó a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Por su parte, la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** guardó silencio en esta etapa procesal.

3. PROBLEMA JURÍDICO

Se contrae a determinar si:

1. En el presente proceso se configuró el acto ficto producto del silencio administrativo negativo en que incurrió la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** frente a la petición radicada por **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, con fecha 6 de junio de 2018.

2. Determinar si **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, tiene o no derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

3. Establecer si como consecuencia de lo anterior, se debe declarar la nulidad del

² La cuantía fue estimada en \$8.161.575, folio 7 vlto.

³ Última unidad laboral en Bogotá, folios 16 y 17.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

acto administrativo demandado, ordenar el correspondiente restablecimiento de derechos y efectuar las condenas a que haya lugar.”

4. HECHOS PROBADOS

Habiéndose solicitado, practicado e incorporado todas las pruebas documentales allegadas al proceso dentro de los términos y oportunidades debidas, sin que hayan sido tachadas de falsas, el Despacho las tendrá como documentos auténticos con los que se tienen como probados los siguientes hechos relevantes:

1.- Que **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, es docente activa al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá⁴.

2.- Que **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una cesantía parcial el 12 de marzo de 2015, pronunciándose la entidad mediante la Resolución No. 4482 del 27 de agosto de 2015⁵.

3.- Que el 6 de junio de 2018, **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006⁶.

4.- A la fecha no ha sido resuelta la petición señalada en el numeral anterior, esto se extrae de los documentos allegados a la demanda.

5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

5.1. En cuanto al acto ficto producto del silencio administrativo negativo de la entidad demandada

Con el fin de resolver el litigio planteado, se determinará en primer lugar, si en el presente caso se configura o no un acto ficto producto del silencio administrativo negativo de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

⁴ Folios 16 y 17.

⁵ Folios 16 y 17.

⁶ Folios 14 y vuelto del mismo.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, respecto de la petición del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, radicada el 6 de junio de 2018.

Para tales efectos, sea lo primero señalar que, el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece, que transcurridos 3 meses a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.

Ahora bien, de la documental obrante a folio 14 del expediente, se advierte que, en efecto, **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, radicó el 6 de junio de 2018, una petición dirigida a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en donde solicitó el reconocimiento y pago de una sanción por mora en el pago de sus cesantías parciales.

Al respecto, valga la pena destacar que, en este caso, el hecho que se pretende demostrar, consiste en una negación indefinida, esto es, la afirmación de la demandante acerca de que la entidad demandada no ha dado respuesta a su solicitud, por lo tanto, dicha afirmación no requiere prueba, tal como lo dispone el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, sino que, por el contrario, la carga de la prueba se traslada a la contraparte, quien tiene la posibilidad de desvirtuar lo manifestado por la actora, demostrando que sí dio respuesta a su solicitud, sin embargo, no lo hizo, razón por la cual, el hecho se tiene como probado.

Así las cosas, al haber transcurrido mucho más de los 3 meses a que se refiere el mencionado artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, sin que se haya obtenido respuesta por parte de la entidad, ha operado el fenómeno del silencio administrativo negativo y se ha configurado un **acto ficto** producto de ese silencio, por lo tanto, el Despacho declarará la existencia del mismo.

5.2. Del régimen aplicable

La Ley 1071 de 2006 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, respecto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

de los términos para pagar las cesantías así como de la mora en el pago de la misma, señala lo siguiente:

“ARTICULO 4º. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5º. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a esta.”

De la norma anterior se determina entonces, que una vez presentada la solicitud de liquidación y pago de las cesantías definitivas o parciales por parte del Servidor Público, la entidad contará con 15 días hábiles para ordenar el pago del monto de las cesantías mediante acto administrativo. Una vez en firme dicho acto administrativo, la pagadora tiene la obligación de cancelar el monto reconocido en un plazo máximo de 45 días hábiles, sino es realizado el pago dentro del término estipulado en la norma, la entidad está obligada a reconocer y pagar una sanción por mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo, hasta que efectivamente se pague el valor de la cesantía.

Frente al régimen aplicable en el tema objeto de debate, con sentencia de unificación Corte Constitucional SU-336 del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Magistrado Ponente (e.) IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, se indicó “aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular”.

En reciente sentencia de Unificación, el Consejo de Estado⁷, calendada 18 de julio de 2018, Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01, No. Interno: 4961-2015, dictó las siguientes reglas jurisprudenciales:

“(…)

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías.

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley⁸ para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías

⁷ Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018.

⁸ Artículo 69 CPACA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

QUINTO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de manera obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los conflictos decididos con antelación.

Así mismo, que al reconocer un derecho, será extensible en los términos previstos en los artículos 10, 102 y 269 del CPACA.

(...)".

Así entonces, de lo manifestado por el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Contenciosa, concluye el Despacho en primera medida, que al docente oficial, le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías; que la sanción moratoria surge por el retardo no sólo en el pago de las cesantías, sino también cuando la administración omite la expedición del acto administrativo de manera oportuna, pues la entidad accionada una vez recibe la petición o solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías, cuenta con un término de 15 días para dar respuesta, en caso de no efectuar pronunciamiento alguno, deberá sumarse 5 o 10 días⁹, que corresponden a la ejecutoria, más 45 días que tendría para realizar el pago efectivo de las mismas.

De manera tal, que una vez el interesado eleva la solicitud, la entidad cuenta con 65 o 70 días hábiles, según el caso, para realizar el pago efectivo de las cesantías, y no obstante la responsabilidad en el pago recae en cabeza de la Fiduciaria La Previsora S.A. por tener a su cargo el manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal situación no exime de responsabilidad al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto es éste quien finalmente paga el auxilio de cesantías con sus propios recursos.

⁹ Término que depende de la fecha en la cual debía ser proferido el acto administrativo, si en vigencia del Decreto 01 de 1984 o de la Ley 1437 de 2011.



5.3. EL CASO CONCRETO

De los hechos probados dentro del proceso se tiene que la accionante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales el día 12 de marzo de 2015, por consiguiente a partir de esta fecha debían contarse los 15 días hábiles para expedir la resolución más los 10 días hábiles de ejecutoria, teniendo entonces como plazo para expedir el acto administrativo y quedando debidamente ejecutoriado el 21 de abril de 2015, y desde esta fecha se cuentan los 45 días hábiles para efectuar el pago de las cesantías, lo que arroja una fecha máxima hasta el 30 de junio de 2015.

Dentro del expediente se observa, que la petición elevada por la accionante, fue resuelta por la Secretaría de Educación en ejercicio de la delegación conferida por la ley para actuar en nombre del Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Resolución No. 4482 del 27 de agosto de 2015, reconociéndole la cesantía parcial, no obstante, la misma debía ser expedida el 21 de abril de 2015 y puso a disposición el pago el 1º de diciembre de 2015, como se corrobora en certificado de pago expedido por la Fiduciaria la Previsora S.A.¹⁰, debiéndose efectuar el 30 de junio de 2015.

De conformidad con lo anterior, se evidencia entonces que las entidades accionada y vinculada incurrieron en mora en el pago de las cesantías parciales, la cual se constituyó entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, por cuanto el 1º de diciembre de 2015, se puso a disposición de la accionante el monto reconocido por concepto de cesantías parciales.

En consecuencia, este Despacho Judicial considera que el acto administrativo demandado al no ordenar el pago de la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con lo normado en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, quedará incurso en causal de nulidad por violación de normas superiores, lo que permite inferir que las súplicas de la demanda en relación con este aspecto tienen vocación de prosperidad.

En consecuencia, la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** y la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** en calidad de administradora de los recursos

¹⁰ Folio 18.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

de **FONPREMAG**, deberán pagar a **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, a título de indemnización, un día de salario por cada día de retardo, durante el lapso comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, concluyendo el Despacho que se presentó una **mora de 153 días**.

Para determinar el valor a reconocer se tendrá en cuenta el salario devengado por la accionante para el año 2015.

5.4. INDEXACIÓN

En el presente evento no es procedente el reconocimiento de la indexación sobre el monto resultante, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C- 448 de 1996, así:

“La sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella.”

Posición que fue acogida por el Consejo de Estado en providencia de fecha 17 de noviembre de 2016¹¹, que al estudiar el problema jurídico planteado, señaló:

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” Consejero Ponente William Hernández Gómez 17 de noviembre 2016.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

“Por consiguiente, debido a que la indemnización moratoria es una sanción severa y superior al reajuste monetario, no es moderado condenar a la entidad al pago de ambas, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria, además de castigar a la entidad morosa, cubre una suma superior a la actualización monetaria.”

Así mismo, la misma Corporación en sentencia de unificación ya referida del 18 de julio de 2018¹², respecto del tema indicó:

“En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella.”

5.5. INTERESES MORATORIOS

En cuanto a la pretensión de condenar a la accionada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia sobre las sumas adeudadas, se niega, pues los mismos incluyen un componente inflacionario, y al reconocer con esta sentencia una obligación por concepto de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, no es dable imponer además el pago de un interés moratorio, pues tal circunstancia implicaría que se genere una doble sanción.

5.6. CONDENA EN COSTAS

No se condenará en costas a la parte vencida, acorde con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365, numerales 5º y 8º del Código General del Proceso, como quiera que no se encuentra comprobada su causación, y considerando que la parte demandada no observó una conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación surtida en este proceso, esto, teniendo en cuenta el criterio sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia con fecha 04 de julio de 2013, proferida por la Sección Segunda, con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso con número de radicación 2007-1000 (1440-12) y la sentencia de 17 de octubre de 2013 proferida dentro del expediente 15001-23-33-000-2012-00282-01, siendo ponente el Consejero Guillermo Vargas Ayala.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la existencia del silencio administrativo negativo, por parte de la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, respecto de la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, elevada por **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA** el 6 de junio de 2018.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto, producto del silencio administrativo negativo de la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, a través del cual negó a **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, la petición radicada el 6 de junio de 2018.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho **ORDENAR** a la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** y la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** en calidad de administradora de los recursos de **FONPREMAG**, reconocer, liquidar y pagar a **YULI ANDREA PACHÓN MAYORGA**, con cédula de ciudadanía No. 39.627.813, la sanción por mora prevista en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, consistente en un día de salario, por cada día de retardo durante el lapso comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, única y exclusivamente, es decir, por un total de 153 días.

Para determinar el valor a reconocer se tendrá en cuenta el salario devengado por la accionante para el año 2015, que fue cuando se causó la mora.

CUARTO: NEGAR el reconocimiento de la indexación sobre el monto resultante de la condena, así como el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia sobre las sumas adeudadas.

QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente No.: 11001-33-35-010-2019-00218-00

SEXTO: **NEGAR** las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: **ORDENAR** a la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, que den cumplimiento a esta providencia en el término señalado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, **DEVUÉLVASE** a la interesada el remanente de la suma que se ordenó cancelar para gastos ordinarios del proceso si la hubiere, dejar las constancias a que haya lugar, y una vez y cumplida la misma, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOVENO: La presente providencia, se notifica a las partes de conformidad con el artículo 203 del CPACA, en concordancia con lo normado en el artículo 247 ibídem.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

Jofl

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ
JUEZ

JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: c26a166b517431d4d18910a3f2ae117c50913edfa2769a19ec0225420362faac

Documento generado en 08/04/2021 03:58:10 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>